

## **Objetivo: Migrantes**

## Tabla de contenido

<b>Parte I: El surgimiento de los pequeños ejércitos de México .....</b>	<b>3</b>
México: de los negocios familiares a los pequeños ejércitos .....	6
<b>Parte II: Pandillas, deportaciones y violencia en Centroamérica.....</b>	<b>11</b>
<b>Parte III: La Ruta del Peligro .....</b>	<b>19</b>
Organizaciones criminales .....	20
Pandillas .....	21
Coyotes .....	23
Mezcla de cargas .....	24
Conclusión.....	26

## Parte I: El surgimiento de los pequeños ejércitos de México

Por Steven Dudley



México y Centroamérica se han convertido en unas de las zonas más peligrosas del planeta, fuera de las zonas que se encuentran en guerra. Actualmente, la región está enfrentando desafíos sin precedentes en la seguridad, provenientes de las pandillas callejeras, la creciente presencia de organizaciones criminales sofisticadas, y la corrupción endémica en todos los niveles de la policía y el gobierno.

Estos retos no son nuevos, pero están creciendo en intensidad y visibilidad. A medida que aumentan los riesgos para la seguridad humana, también aumenta la vulnerabilidad de los migrantes que cruzan la región para llegar a Estados Unidos. Los peligros se han hecho palpables particularmente en México, donde un número desconocido de migrantes mexicanos, centroamericanos y sudamericanos han sido asesinados o han desaparecido, presumiblemente a manos de actores criminales o de funcionarios públicos corruptos. Muchos más son víctimas de extorsión, violación y otros crímenes.

La tasa de homicidios en Centroamérica es actualmente de un poco más de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes —más del doble de la tasa de homicidios en México (18 homicidios por cada 100.000 habitantes), un país que recibe mucha más atención de los medios internacionales debido a los altos niveles de crimen y violencia. La mayoría de los homicidios en Centroamérica se concentran en los países del Triángulo del Norte —Guatemala, El Salvador y Honduras—, donde el promedio de la tasa de homicidios es de 58 por cada 100.000 habitantes (vea Figura 1).

En comparación, en Estados Unidos la tasa de homicidios alcanzó un máximo de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1980, y actualmente se sitúa alrededor de 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Las estadísticas nacionales totales, sin embargo, ocultan importantes variaciones dentro de los estados. En el Distrito de Columbia (Washington, DC), la tasa de homicidios alcanzó un máximo de 81 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1991, y en 2010 se ubicó alrededor de 22 homicidios por cada 100.000 habitantes —mayor que en Ciudad de

México, donde la tasa de homicidios era de 14 por cada 100.000 habitantes en 2010—. Los altos niveles de violencia en algunas áreas —en el caso de México, en las regiones fronterizas— aumentan los niveles nacionales.

Tanto en México como en Centroamérica, los grupos criminales parecen haber sobrepasado a las fuerzas de seguridad públicas, las cuales no cuentan con el personal suficiente. El control de las actividades ilegales en las áreas rurales y fronterizas, por donde los migrantes a menudo cruzan, es particularmente difícil. Por ejemplo, Olancho, un departamento hondureño (similar a un estado o provincia), cuenta con 250 oficiales de policía para cubrir un área aproximadamente del tamaño de El Salvador, y más grande que Bélgica o que el estado de Maryland en Estados Unidos [1]. El gobierno guatemalteco alistó recientemente a 800 soldados, incluyendo a 300 miembros de las fuerzas especiales Kaibil del país, que se especializan en combatir en la selva y en actividades de contrainsurgencia, para reforzar a la policía local, en la remota provincia de Petén, que limita con México. La corrupción de las fuerzas de seguridad pública —en algunos casos a niveles altos— complica aún más estos retos.

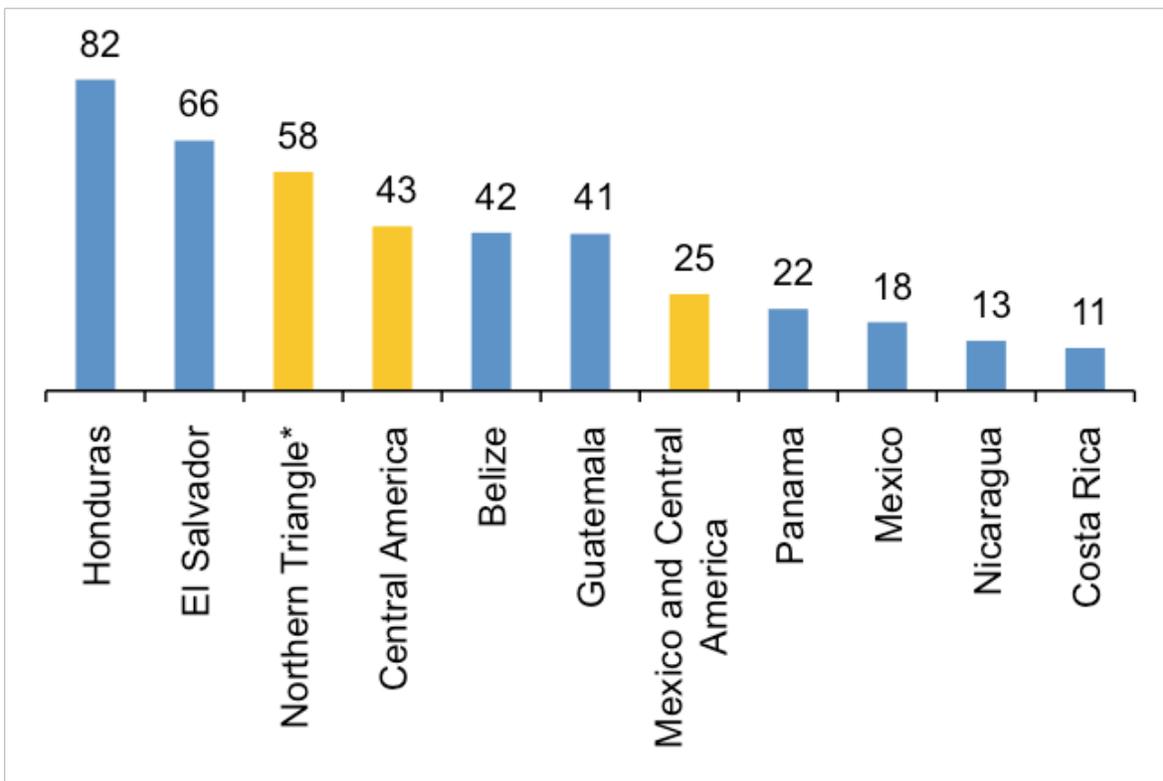


Figura 1. Tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes (Nótese \*El Salvador, Honduras y Guatemala)

Fuente: Datos de homicidio reunidos por la Organización de Naciones Unidas; cálculos sobre población obtenidos de Population Reference Bureau.

Por décadas, los migrantes centroamericanos que cruzan México para dirigirse hacia Estados Unidos han sido víctimas de crímenes violentos. (Lo mismo ocurre con los mexicanos que transitan hacia Estados Unidos.) A diferencia del pasado, cuando esta situación pasaba en gran parte desapercibida por las comunidades y el gobierno, actualmente hay creciente preocupación y atención en la región sobre los peligros que enfrentan los migrantes que cruzan México. A pesar de las amenazas e intimidaciones periódicas, los medios de comunicación mexicanos y centroamericanos ahora informan regularmente sobre los crímenes en contra de los migrantes. También es importante el hecho de que los funcionarios públicos ahora reconocen que el maltrato de los migrantes que cruzan la región no puede seguir siendo ignorado o considerado como un fenómeno aislado.

Este artículo se centra en el impacto que tienen los grupos criminales en México y el Triángulo del Norte de Centroamérica sobre los migrantes que se dirigen al norte. Estudia los orígenes y el crecimiento de las principales redes que operan en México y Centroamérica, y luego esboza lo poco que se sabe sobre cómo los grupos criminales se benefician del flujo de migrantes hacia el norte, y en algunos casos lo facilitan. La evidencia se basa tanto en investigación de campo como en información secundaria, incluyendo discusiones con funcionarios de México y los tres países del Triángulo del Norte.

En primer lugar, es importante distinguir entre pandillas callejeras, grupos de crimen organizado, y organizaciones criminales transnacionales:

Las pandillas callejeras, que tienen sus raíces en la pobreza endémica y en la extendida urbanización, se cuentan por miles y se han beneficiado de las economías ilegales que florecen en los barrios más pobres de la región. En Centroamérica, varias pandillas callejeras predominantes surgieron en Estados Unidos y fueron traídas a la región por los deportados. Se componen principalmente de hombres jóvenes de comunidades marginadas, la mayoría de los cuales tiene antecedentes violentos y, a menudo, historias de abuso de sustancias psicoactivas. Las pandillas callejeras controlan los barrios y mercados locales, de donde obtienen sus rentas mediante extorsiones, aunque también se dedican al secuestro, el asalto y el asesinato por contrato. En algunos casos, como se describe a continuación, las pandillas callejeras han subcontratado sus servicios como distribuidores de contrabando o como sicarios al servicio de organizaciones criminales más grandes. Sin embargo, ellas carecen de la sofisticación y la estructura de los grupos de crimen organizado.

Los grupos de crimen organizado son más grandes y más sofisticados que las pandillas, y en México y Centroamérica tienen su origen en desmovilizados de las fuerzas paramilitares, de inteligencia y el ejército. Tienen un alcance geográfico más grande y participan en actividades más lucrativas que las pandillas callejeras

—principalmente el tráfico y la distribución de drogas y armas—. El gran margen de ganancia de estas actividades les ha permitido a los grupos de crimen organizado construir estructuras jerárquicas sofisticadas. Fortalecidos por un aumento en la cantidad de drogas ilegales que se trafican por México y Centroamérica, los grupos de crimen organizado tienen más recursos, controlan más infraestructura, tienen acceso a más “soldados” y armas, y tienen mayor control sobre las instituciones gubernamentales. Estas mismas organizaciones también han diversificado sus portafolios criminales, usando sus organizaciones y el control de las rutas ilegales de tráfico, como las utilizadas para el tráfico de personas.

Las organizaciones criminales transnacionales son grupos de crimen organizado que tienen una presencia operacional, y no simplemente transaccional, en varios países.

Aunque los gobiernos de México y Centroamérica buscan reducir la agresiva influencia de la criminalidad en sus sociedades, mediante la confrontación de los grupos involucrados en todo tipo de actividades ilícitas, sus esfuerzos se ven obstaculizados por la desinformación generalizada sobre la relación entre los grupos criminales y el movimiento de migrantes a través de la región. Poco se sabe sobre el papel de los grupos criminales en el tráfico de migrantes, sobre las organizaciones que participan en este mercado, ni sobre el grado de maltrato, extorsión y asesinato. Distinguir la realidad del mito es extremadamente difícil. La inteligencia sobre la estructura, evolución y operaciones de las pandillas callejeras y de grupos criminales más sofisticados depende a menudo de información imprecisa u obsoleta, proveniente de entrevistas y de la observación en el terreno. Es escasa la evidencia concreta para corroborar incluso los puntos de vista de los observadores más informados. Como resultado de ello, los argumentos presentados en este informe están inevitablemente basados en anécdotas. Sin embargo, ellos representan la mejor evidencia pública sobre los retos que enfrenta la región.

### **México: De los negocios familiares a pequeños ejércitos**

En México, las grandes organizaciones criminales se originaron a finales de los años sesenta, cuando pequeños grupos familiares se dedicaban al tráfico de mercancía de contrabando, personas, drogas ilegales y otros productos hacia Estados Unidos. Este núcleo de contrabandistas adquirió mayor importancia cuando la cocaína de los Andes empezó a transitar por la región entre los años setentas y ochentas. Los proveedores colombianos usaban a las organizaciones criminales mexicanas para recibir y enviar sus productos hacia el norte, donde los esperaban cadenas de distribución locales.

Inicialmente, el tráfico fluía a través de México y era en pequeñas cantidades, pero el rol de los mexicanos empezó a ser más relevante una vez que Estados Unidos

empezó a ejercer mayor presión sobre las actividades del Caribe, lo cual forzó a los traficantes de cocaína a optar por el camino a través del istmo.

Para los años noventa, gran parte de la cocaína que ingresaba a Estados Unidos pasaba por México, y algunas organizaciones criminales mexicanas empezaron a tener una mayor parte de las ganancias, estableciendo sus propias redes de distribución en Estados Unidos. Estas incluyen los comienzos de las organizaciones que serían más tarde conocidas como los carteles de Sinaloa, Tijuana, Juárez y el Golfo.

En un comienzo, los carteles mexicanos eran pequeñas organizaciones familiares que dependían de la corrupción de las fuerzas de seguridad estatales, las cuales les ofrecían protección para que no fueran perseguidos judicialmente al igual que sus rivales. No obstante, esto cambió una vez los carteles mexicanos se expandieron y empezaron a dedicarse a la distribución, con lo que aumentaron sus ganancias y sus operaciones. Los altos ingresos llevaron a una mayor competitividad entre las organizaciones, lo que las llevó a establecer sus propias fuerzas de seguridad para proteger sus mercados y ganancias. Este proceso alteró por siempre la manera en que las organizaciones criminales operaban en México (y luego en Centroamérica), y ha contribuido a la proliferación del secuestro de inmigrantes que se mueven a lo largo del país.

El desarrollo del ala militar de estas organizaciones es significativo por varias razones. La primera representa un quiebre con respecto al modelo de organizaciones familiares pequeñas del pasado. Esta transformación fue profunda. Los nuevos ejércitos paramilitares adoptaron la terminología y la lógica militar y de sus entrenadores militares, algunos de los cuales eran mercenarios extranjeros [2]. Las organizaciones empezaron a designar “tenientes” y a crear “células”, las cuales incluían unidades responsables de recopilar inteligencia. Estos nuevos “soldados” llevaron a cabo entrenamiento y adoctrinamiento obligatorio, para luego unirse a la lucha para evitar que otros carteles incursionaran en su territorio. Junto con su nueva cara militar, la infraestructura de los carteles también creció. Para este entonces contaban con refugios, equipos de comunicación, carros y armas —el mismo tipo de infraestructura necesaria para cualquier actividad criminal sofisticada, desde un robo hasta un secuestro, incluso hasta el contrabando de mercancía—.

Además de asegurar su propio territorio, los carteles empezaron a competir por los territorios estratégicos, o plazas, como se les conoce. En el mundo de la delincuencia mexicana, el control de una plaza significa cobrarle un impuesto (algo así como un peaje) a cualquier actividad llevada a cabo por cualquier grupo criminal que opere en ese territorio. El llamado piso suministra un flujo de ingresos, ya que el grupo al mando se lleva más de la mitad de las ganancias por el

contrabando que pasa a través de su corredor —ya sean armas, personas o droga—. Las fuerzas de seguridad corruptas participaron en algún momento en esta parte del negocio, pero con el tiempo los grupos criminales usurparon ese control.

A su vez, la lucha por las plazas depende del número de soldados que mantiene cada cartel. En el caso del Cartel de Tijuana, la familia Arellano Félix comenzó a trabajar con la Pandilla de la Calle Logan de San Diego, capacitándolos en el uso de armas, tácticas y en recolección de inteligencia. El Cartel del Golfo contrató a miembros del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFES) de México, que adoptó el nombre de Los Zetas en honor a los códigos que usaban por radio sus comandantes militares. El Cartel de Juárez contrató a policías y expolicías para formar el grupo que se conoce como La Línea; y más tarde a una pandilla callejera conocida como los Aztecas en El Paso. El Cartel de Sinaloa designó a una facción de su grupo, la Organización Beltrán Leyva, para crear un pequeño ejército que le hiciera frente a sus rivales (apoyados por varias pandillas callejeras más pequeñas), en lugares donde el cartel opera a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México.

Los nuevos "soldados" tienen una característica común: no son parte de la estructura familiar original, que otrora se encontraba en el núcleo de las organizaciones criminales mexicanas [3]. Antes las organizaciones criminales mexicanas eran relativamente pequeñas, y en su mayoría estaban compuestas por familiares del estado de Sinaloa, donde habían trabajado en campos de cultivos de amapola y marihuana. (Vea en el Apéndice 2 un mapa de los estados mexicanos).

La pertenencia a los grupos se daba por lazos de sangre, matrimonio o afecto — hasta que las fuerzas del mercado requirieron que estas uniones tradicionales se profesionalizaran y permitieran la admisión de extranjeros con el fin de seguir siendo competitivos—.

En un principio, los líderes de estos grupos les concedían a los “forasteros” poca autoridad o poder discrecional. Algunos líderes, como Ramón Arellano Félix, del Cartel de Tijuana, y Osiel Cárdenas Guillén, del Cartel del Golfo, controlaban directamente sus nuevos ejércitos, exigiendo su lealtad a toda costa. Con el tiempo, sin embargo, esto resultó ser un mal modelo a seguir, dado que tan pronto un líder fuerte era eliminado (como en el caso de Arellano Félix en 2002) o detenido (como en el caso de Cárdenas en 2003), las lealtades individuales se desintegraban y estos ejércitos comenzaban a romper con el comando central del cartel. La lealtad se convirtió en una mercancía sujeta a la dinámica de los precios del mercado, en lugar de ser una obligación “familiar” o tradicional.

Los nuevos ejércitos privados eran costosos en todos los niveles, y los líderes de los carteles empezaron a buscar formas de reducir costos, incluso a medida que continuaban su expansión y la profesionalización de sus operaciones. Pese a que la

evidencia es escasa, los informes indican que desde finales de los noventa, de forma gradual, de mala gana y violentamente, los carteles desplazaron la responsabilidad financiera y el control operativo hacia sus lugartenientes —un proceso que únicamente fue evidente cinco o seis años más tarde—. Con esta autonomía recién adquirida, muchas células ampliaron sus operaciones a los servicios de seguridad e incursionaron en la extorsión de negocios legales y, más adelante, en el secuestro.

Este cambio en la toma de decisiones financieras y operativas representa una segunda transformación profunda en la forma como operan los carteles mexicanos. De un momento a otro, en lugar de una organización criminal centralizada, había numerosas células exigiendo piso por actividades criminales como el contrabando y el tráfico de personas, y compitiendo, a menudo violentamente, por el territorio y los mercados. Los ingresos por tráfico de personas son importantes. De acuerdo con Naciones Unidas (ONU), se estima que el tráfico de personas en el hemisferio occidental es un negocio de US\$6.000 millones al año [4]. No obstante, para los carteles mexicanos los ingresos totales provenientes del tráfico de personas son relativamente pequeños en comparación con los ingresos del tráfico internacional de drogas, que se encuentran probablemente entre US\$15.000 y 25.000 millones. Los márgenes de ganancias del tráfico de drogas —los cuales son aproximadamente el 80 por ciento de los ingresos— son quizá también mayores que los del tráfico de personas.

Las nuevas organizaciones militarizadas tenían una mentalidad nueva, centrada en la ocupación de grandes cantidades de espacio físico. Su rápido crecimiento provocó un cambio en la estructura financiera. A medida que aumentaban las operaciones, también aumentaba la necesidad de proteger a los líderes para que no fueran detectados. Las unidades de estos multifacéticos ejércitos ganaron mayor autonomía para participar cada vez más en múltiples actividades criminales. Esto permitió la entrada de personal cuyas lealtades no eran hacia la cúpula. El nuevo sistema descentralizado funcionaba, siempre y cuando una persona fuerte siguiera siendo el líder. Sin embargo, tan pronto como ese líder era eliminado, la organización inevitablemente se resquebrajaba y, en muchos casos, estallaba la violencia entre facciones rivales.

Este proceso se ha repetido una y otra vez en la última década. En un esfuerzo por aumentar las ganancias, las diferentes facciones de las grandes organizaciones han diversificado sus portafolios criminales, ahondando en el tráfico de personas, el contrabando, la extorsión, la piratería, el secuestro y otras actividades criminales. Muchas de estas facciones han roto los lazos con sus organizaciones originales, incluyendo grandes facciones del Cartel de Tijuana, Los Zetas, La Línea y la Organización Beltrán Leyva. Las autoridades todavía se refieren a los grupos pequeños con los nombres de las organizaciones más grandes a las que alguna vez pertenecieron. Esta práctica puede ayudar a dar sentido a la caótica situación de

México, pero la realidad es mucho más compleja. InSight Crime, por ejemplo, recientemente contabilizó 28 grupos criminales en México. Como se describe más adelante, estos grupos suelen contratar unidades más pequeñas y pandillas locales, lo que complica aún más la situación y hace que nuestro trabajo de categorizar el caos sea más difícil.

Existe poca evidencia que permita confirmar que las organizaciones criminales mexicanas hayan establecido sus propias redes de distribución en Estados Unidos. Ha habido algunos arrestos de líderes mexicanos del crimen organizado y miembros de sus familias en Estados Unidos, pero no es claro si las estructuras organizativas de estos grupos se han consolidado en ese país. Tampoco existe evidencia convincente de que los carteles mexicanos tengan presencia permanente y activa en países productores de droga como Colombia, Perú y Bolivia. La presencia de los carteles mexicanos en los países andinos parece ser puramente transaccional, más que operativa o estratégica. En este sentido, es poco probable que las organizaciones criminales mexicanas se hayan integrado verticalmente por completo o que se hayan “vuelto transnacionales”, como suele suponerse.

### **Notas al pie**

[1] El área total de Olancho es de alrededor de 24,000 kilómetros cuadrados; la población era de 509,564 en 2010. Vea el Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Hogares a Propósitos Múltiples 2010 (Tegucigalpa: INE).

[2] Según un oficial entrevistado por el autor, uno de los entrenadores del Cartel de Tijuana se llamaba "El Iraquí" por sus orígenes de Oriente Medio. Otros entrenadores provinieron del ejército mexicano y los círculos policiales, según un ex agente Cartel de Tijuana. Véase también Nathan Jones Nathan Jones, "A State Reaction: A Theory of Illicit Network Resilience" (tesis en la Universidad de California Irvine, 2011).

[3] La única excepción es la Organización de los Beltrán Leyva. Aún así, este grupo finalmente se separó del Cartel de Sinaloa tras la captura de uno de sus líderes de alto rango, sus miembros creen que fue traicionado por el líder de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo".

[4] La Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC), *The Globalization of Crime: A Transnational Organized Crime Threat Assessment* (Viena: UNODC, 2010), [www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/tocta-2010.html](http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/tocta-2010.html)

## Parte II: Pandillas, deportaciones y violencia en Centroamérica

Por Steven Dudley



La evolución de las organizaciones criminales en Centroamérica se ha dado de manera diferente a como ocurrió en México. Las organizaciones más grandes se originaron en los años ochenta, cuando en gran parte de la región se presentaron guerras civiles. En muchos sentidos, estos conflictos sentaron las bases para la actual ola de violencia y actividad criminal.

El más famoso y sofisticado de estos grupos criminales está compuesto por guerrilleros que lucharon contra los gobiernos de Guatemala y El Salvador. En el caso de Honduras, un ejército contrarrevolucionario luchó contra el vecino gobierno sandinista de Nicaragua. Los grupos revolucionarios (que más tarde se hicieron criminales) operaban en lugares donde no había presencia del gobierno, como las zonas fronterizas remotas y las vastas selvas de la región. La provincia guatemalteca de Petén, por ejemplo, ocupa un tercio del territorio del país, y sin embargo tiene sólo el tres por ciento de la población y una reducida presencia estatal a lo largo de los 400 kilómetros (aproximadamente 250 millas) de frontera que comparte con México. La provincia hondureña de Gracias a Dios está prácticamente deshabitada, e incluso en la parte más desarrollada de la provincia, un trayecto de 40 kilómetros (aproximadamente 25 millas) en auto puede tardar seis horas [1].

Para poder operar en estas regiones, los grupos guerrilleros utilizaban redes ilegales y corredores de movilidad para obtener víveres, armas, uniformes y otros materiales necesarios para llevar a cabo una guerra contra el Estado. Algunos de estos corredores habían sido utilizados antes de la guerra. Por ejemplo, muchos habían sido utilizados para llevar productos más baratos y libres de impuestos — incluyendo elementos que no representaban una amenaza, como los productos lácteos— a los países del Triángulo del Norte, desde los países vecinos. Otros eran empleados para transportar drogas ilegales y otros productos ilícitos a través de la región en su camino hacia Estados Unidos. En los años ochenta, estos corredores empezaron a ser usados también como rutas para el tráfico de armas.

Al igual que en México, los núcleos de la mayoría de las redes de contrabando comenzaron como grupos familiares y de amigos. Localmente son conocidos como "transportistas", por su papel en el transporte de bienes [2]. Actualmente, en algunos casos las redes se extienden desde Panamá hasta Guatemala. Todavía transportan todo tipo de productos, tanto legales como ilegales, al igual que inmigrantes. Algunos han comenzado negocios de transporte legales o empresas de otro tipo (por ejemplo, compañías pesqueras u hoteles) para camuflar sus actividades, y en general trabajan libremente con diversos actores criminales que buscan traficar mercancía ilegal.

Las guerras civiles centroamericanas contribuyeron a la eventual militarización de dichos grupos familiares. Durante las guerras civiles, los gobiernos del Triángulo del Norte robustecieron sus fuerzas armadas, policías y servicios de inteligencia. A medida que las fuerzas de seguridad crecieron en tamaño, con el tiempo comenzaron a ejercer control sobre las diferentes agencias gubernamentales. En algunos casos, su influencia sobre el gobierno fue absoluta, como ocurrió en los años ochenta en Guatemala, cuando los líderes militares asumieron la presidencia.

No obstante, cuando la guerra terminó en Guatemala y El Salvador, esos gobiernos redujeron en gran medida el tamaño de sus fuerzas armadas y reemplazaron sus servicios de inteligencia. Oficiales y agentes que quedaron sin trabajo ofrecieron sus servicios a otros sectores del gobierno, o vendieron sus conocimientos al mundo del hampa o al sector privado. En Guatemala, por ejemplo, una vasta red de exagentes de inteligencia militar ahora negocia con pasaportes falsos, seguridad privada, armas y adopciones ilegales [3].

Al final de la guerra también quedó un gran número de guerrilleros desempleados. Algunos de los guerrilleros más sofisticados incursionaron en la política, pero otros lo hicieron en actividades ilegales como el secuestro, el tráfico de armas y, más recientemente, el tráfico de drogas. Su experiencia durante las guerras los había equipado con las herramientas y conocimientos necesarios para sobresalir en actividades ilegales. En El Salvador, por ejemplo, algunos miembros del Partido Comunista, que formaron la columna vertebral de una de las unidades guerrilleras más formidables del país, se involucraron en secuestros, tráfico de armas y robo de vehículos [4].

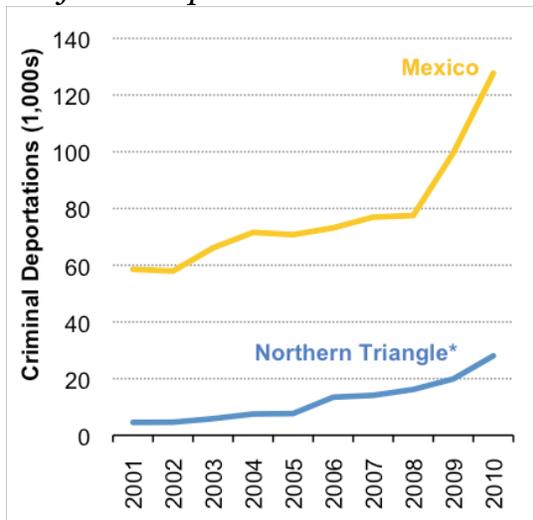
Por último, las guerras civiles desataron una corriente migratoria hacia el norte, que ha crecido en los últimos años y ha transformado a los países del Triángulo del Norte. Miles de inmigrantes y refugiados huyeron a Estados Unidos, estableciéndose en grandes ciudades como Los Ángeles. Al sentirse vulnerables ante otras pandillas de estas ciudades, algunos miembros de estos nuevos enclaves crearon sus propias pandillas. Al principio satisfacían las necesidades de protección y seguridad de la comunidad, pero las actividades de dichas pandillas se

convirtieron rápidamente en acciones criminales, como el sicariato, la extorsión, la distribución local de drogas (microtráfico) y la prostitución.

El surgimiento de tales pandillas en los noventa coincidió con las iniciativas estatales y federales en Estados Unidos, que llevaron a extender los periodos de encarcelamiento para los miembros de pandillas y el aumento en las deportaciones de exconvictos [5]. El número de miembros de pandillas deportados aumentó rápidamente, al igual que el número de organizaciones transnacionales que operan en el Triángulo del Norte. En muchos casos, los pandilleros deportados buscaron replicar sus actividades en Centroamérica, donde encontraron reclutas dispuestos a engrosar las filas de sus organizaciones. Tras el fin de las guerras civiles, muchos jóvenes carecían de oportunidades de educación y hacían parte de familias disfuncionales. Adicionalmente, la rápida urbanización en la región dejó a muchas familias sin una sólida base económica o social. Las pandillas de jóvenes marginados ofrecían beneficios rápidos, un sentido de pertenencia y el fácil acceso a las armas y a combatientes experimentados para entrenar y armar a los jóvenes reclutas.

Las deportaciones aumentaron a comienzos de este siglo. Entre 2001 y 2010, Estados Unidos deportó a Centroamérica a 129.726 delincuentes condenados, más del 90 por ciento de los cuales fueron enviados a Honduras [6]; un país con aproximadamente la misma población que Haití tuvo 44.042 delincuentes deportados durante ese período. Por el contrario, durante el mismo período, el Caribe recibió 44.522 delincuentes deportados en total [7].

Gráfico 1. Deportaciones criminales desde Estados Unidos, 2001-2010



Fuente: US Department of Homeland Security (DHS), Yearbook of Immigration Statistics, 2010 (Washington, DC: DHS).

Con las deportaciones, las dos pandillas más importantes de Los Ángeles —la Mara Salvatrucha 13 y la Barrio 18— se convirtieron rápidamente en las dos principales pandillas transnacionales en el Triángulo del Norte. Según algunas estimaciones, las pandillas cuentan actualmente con entre 60.000 y 95.000 miembros en el Triángulo del Norte [8].

Las pandillas estadounidenses y centroamericanas están conectadas mediante nombres, normas y formas de vestirse. Sin embargo, la búsqueda de evidencia empírica que vincule directamente las deportaciones a la actividad criminal es difícil. No ha habido ningún esfuerzo sistemático por parte de las autoridades estadounidenses, mexicanas o del Triángulo del Norte de rastrear los pandilleros deportados y su reincidencia en el delito [9]. Más aún, ha habido poca comunicación oficial e intercambio de información entre los países. El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) no clasifica a los deportados como “pandilleros” en los formularios de deportación, y el FBI únicamente proporciona información de antecedentes penales a las instituciones gubernamentales asociadas si así lo solicitan.

Varios proyectos del gobierno de Estados Unidos buscan aumentar los flujos de información, incluyendo los registros de huellas dactilares y los datos históricos de pandilleros deportados [10]. No obstante, los problemas persisten. Por ejemplo, en uno de los más recientes programas experimentales en El Salvador, el FBI le dio a conocer a una unidad especial de la policía salvadoreña una lista de presuntos miembros de pandillas deportados, que luego la difundió entre las fuerzas de seguridad del país. Sin embargo, según las entrevistas realizadas por el autor de este informe, la unidad policial encargada de la difusión de la información no se comunica apropiadamente, o en algunos casos se niega a entregar los nombres de presuntos pandilleros a otras agencias de la policía. Hay muchas razones que explican estas fallas en la comunicación, incluida la desconfianza acerca de cómo se debe usar la información [11].

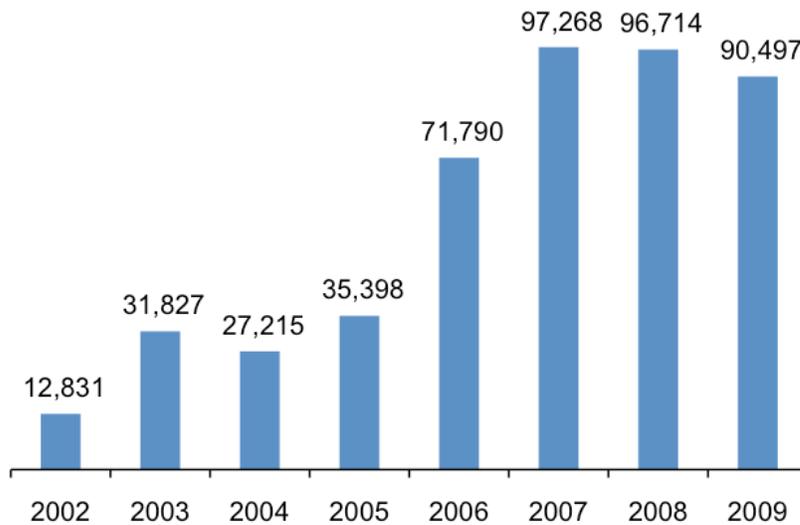
Estos desafíos no se limitan a Centroamérica. México recibe más criminales deportados que el resto de los países centroamericanos juntos: entre 2001 y 2010, Estados Unidos devolvió 779.968 criminales a México. La comunicación entre las autoridades estadounidenses y mexicanas es igualmente débil. Por ejemplo, según el exalcalde de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz (2007-2010), a menudo Estados Unidos simplemente libera delincuentes deportados en el puente que une Juárez y El Paso sin previo aviso. El gobierno municipal de Juárez finalmente desarrolló un sistema para transportar deportados en autobús a otras zonas de México, pero muchos encuentran su camino de regreso a Ciudad Juárez, donde se pierden en el complejo penal de la ciudad [12].

Aparte del aumento de la actividad de las pandillas, Centroamérica también ha experimentado un incremento en el narcotráfico. Durante gran parte de la última década, la zona sirvió como un trampolín para el transporte de drogas hacia el norte, especialmente cocaína y heroína. Los datos sobre las incautaciones de droga muestran un retrato incompleto de toda la escala del comercio ilícito de drogas. Dicho esto, las incautaciones de cocaína reportadas en Centroamérica indican un aumento significativo, especialmente entre 2005 y 2007.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) calcula que hasta 300 toneladas de cocaína se mueven a través de la región cada año. Las drogas son transportadas por vía marítima, aérea y terrestre. En las vías marítimas se utilizan lanchas rápidas y embarcaciones pesqueras, o una combinación de ambas. Los traficantes utilizan las islas y las costas de Nicaragua y Honduras como puntos de entrega y zonas de almacenamiento. Para transportar los productos por vía aérea, las organizaciones criminales utilizan cientos de pistas de aterrizaje, tanto privadas como clandestinas, ubicadas en Honduras y Guatemala. De allí, las drogas se mueven en vehículos particulares o camiones comerciales a lo largo de las rutas terrestres.

La importancia del Triángulo del Norte en esta cadena de distribución va más allá de su reserva de rutas prefabricadas, funcionarios gubernamentales fácilmente corruptibles, y soldados dispuestos y bien entrenados. A medida que el gobierno mexicano ha aumentado su presión sobre los grupos criminales en México, ellos han buscado refugio en los países del Triángulo del Norte. Las grandes organizaciones criminales mexicanas, como el Cartel de Sinaloa y Los Zetas, han trasladado partes importantes de sus operaciones a Guatemala y Honduras. Entran a través de canales informales e ilegales, obtienen identificaciones falsas de redes clandestinas y de oficiales locales corruptos, y en general operan de incógnito. Como es de esperar, la lucha entre las organizaciones criminales locales, los transportistas y las organizaciones extranjeras se ha intensificado.

*Gráfico 2. Incautaciones de cocaína en Centroamérica (kilogramos), 2002-2009*



Fuente: United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *The Globalization of Crime: A Transnational Organized Crime Threat Assessment* (Vienna: UNODC, 2010)

El desplazamiento de las operaciones criminales de México a Centroamérica ha generado cambios en otros sectores de la economía clandestina. En toda la región, actualmente las grandes organizaciones criminales a menudo les pagan a sus trabajadores contratados con productos ilícitos. Estos trabajadores contratados, que incluye pandillas callejeras tanto en Centroamérica como en México, luego venden los productos a nivel local. La economía mexicana de la droga se ha convertido en una empresa muy lucrativa, pues los precios de la cocaína pura en Ciudad de México llegan a los US\$18.000 por kilogramo. Como resultado, la competencia por ganar el control del producto se ha desplazado de México al Triángulo del Norte, donde el precio por kilo está cerca de los US\$12.000 [13].

## Notas al pie

[1] Entrevistas del autor, Honduras, Febrero 21-25, 2010.

[2] Para más información sobre las redes de transportistas, vea Steven Dudley, “Drug Trafficking Organizations in Central America: Transportistas, Mexican Cartels and Maras” (serie de trabajos sobre la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y México, el Woodrow Wilson Center for International Scholars y el Instituto Transfronterizo, Junio 2010),

[www.stevendudley.com/pdf/Wilson%20Center%20Central%20America%20Dudley%2005%2017%2010.pdf](http://www.stevendudley.com/pdf/Wilson%20Center%20Central%20America%20Dudley%2005%2017%2010.pdf).

[3] Entrevistas del Autor con ex oficiales y actuales oficiales de inteligencia, Ciudad de Guatemala, Guatemala, Enero 19-Febrero 4, 2010.

[4] Douglas Farah, “Organized Crime in El Salvador: The Homegrown and Transnational Dimensions” (serie de trabajos sobre el crimen organizado en Centroamérica, el Woodrow Wilson International Center for Scholars, Latin America Program, Febrero 2011), [www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Farah.FIN1.pdf](http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Farah.FIN1.pdf).

[5] Las leyes “Three Strikes” han ampliado significativamente las penas de prisión para los delincuentes reincidentes, y la Illegal Immigrant Reform y el Immigrant Responsibility Act de 1996 ampliaron las categorías por las cuales los inmigrantes podrían ser deportados. Vea Kate Saint Germain y Carly J. Stevens, “Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act,” Legislación de inmigración de Estados Unidos en línea, 1996, [http://library.uwb.edu/guides/usimmigration/1996\\_illegal\\_immigration\\_reform\\_and\\_immigrant\\_responsibility\\_act.html](http://library.uwb.edu/guides/usimmigration/1996_illegal_immigration_reform_and_immigrant_responsibility_act.html).

[6] Los datos se refieren a los acontecimientos en lugar de los individuos. Como resultado, algunos individuos pueden ser contados varias veces en los datos. Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), Office of Immigration Statistics, 2010 Yearbook of Immigration Statistics (Washington, DC: DHS, 2011), [www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/yearbook/2010/ois\\_yb\\_2010.pdf](http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/yearbook/2010/ois_yb_2010.pdf).

[7] En comparación con otros países de Centroamérica, los países del Triángulo del Norte no reciben un alto porcentaje de criminales entre los deportados. Casi dos tercios de los deportados hacia República Dominicana y Jamaica, por ejemplo, son delincuentes deportados, mientras que la porción para las naciones del Triángulo del Norte es mucho menor: aproximadamente un quinto para Guatemala, un cuarto para Honduras, y un tercio El Salvador. Sin embargo, estas naciones del caribe reciben muchos menos delincuentes deportados que los países del Triángulo del Norte. Clare Ribando Seelke, Gangs in Central America (Washington, DC: Congressional Research Service, 2011), [www.fas.org/sgp/crs/row/RL34112.pdf](http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL34112.pdf).

[8] Las estimaciones varían ampliamente. La ONUDD dice que hay 10.500 en El Salvador, 36.000 en Honduras, y 14.000 en Guatemala. En Febrero, el ministro del interior de Guatemala estimó que 20.000 operan en Guatemala, 40.000 en El Salvador, y 35.000 en Honduras. Vea Marciela Castañón, “Estiman que 95 mil pandilleros operan en Triángulo Norte,” La Hora, Febrero 2012, <http://lahora.gt/hemeroteca-lh/estiman-que-95-mil-pandilleros-operan-en-triangulo-norte/>

[9] Un informe de 2007 del Banco Mundial se refirió a este tema, en relación a Jamaica, en un intento por analizar la relación entre las deportaciones y el delito. Según el informe, entre 1993 y 2004 Jamaica absorbió 1.200 criminales al año. Ochenta y uno por ciento de los deportados desde Estados Unidos, Canadá, y Gran Bretaña entre los años 2001 y 2004 fueron delincuentes “no violentos”. Pero 224 fueron asesinos, una cifra que no es insignificante con respecto a la población de Jamaica. “En países tan pequeños, no es necesario un gran número de delincuentes para tener un gran impacto, especialmente si a su regreso, ellos asumen un papel de liderazgo en las pandillas criminales, o proporcionan modelos a imitar perversos para los jóvenes,” concluye el informe del Banco Mundial. Vea Banco Mundial y las Naciones Unidas, Crime, Violence, and Development: Trends, Costs, and Policy Options in the Caribbean (Banco Mundial y Naciones Unidas, 2007), <http://scm.oas.org/pdfs/2008/CP20887E01.pdf>.

[10] Para una visión y evaluación más completa de las políticas de Estados Unidos contra las pandillas en la región, vea Florina Cristiana Matei, “The Impact of US Anti-gang Policies in Central America: Quo Vadis?” in Maras: Gang Violence and Security in Central America (Austin, TX: University of Texas Press, 2011).

[11] Entrevistas del Autor, San Salvador, El Salvador, Mayo 11-15, 2011.

[12] Entrevista de Reyes con el autor, Ciudad Juárez, México, Mayo 3, 2010. Este flujo de información hacia México, sin embargo, está mejorando. En Septiembre de 2012, representantes de la policía municipal de Juárez dijeron al autor que ellos estaban recibiendo notificaciones de las deportaciones de los miembros de las pandillas, así como información sobre la actividad criminal previa.

[13] Entrevistas del autor, realizadas en 2011 en México, Guatemala, y los Estados Unidos con oficiales de inteligencia de varios gobiernos, así como ex miembros de grupos delictivos.

## Parte III: La ruta del peligro

Por Steven Dudley

Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) —la única entidad gubernamental que ha publicado datos sobre los secuestros de los migrantes—, 9.758 migrantes fueron secuestrados en 33 “incidentes” diferentes, entre septiembre de 2008 y febrero de 2009. En un estudio de 2011, la CNDH estimó que 11.333 migrantes fueron secuestrados entre abril y septiembre de 2010, en 214 incidentes diferentes. Extrapolando los hallazgos de la CNDH en 2011, se puede suponer que alrededor de 20.000 migrantes son secuestrados cada año en México.



Las estimaciones de la CNDH se basan en cientos de visitas a centros de refugiados, iglesias y otros lugares donde se concentran los migrantes. Sin embargo, los analistas gubernamentales cuestionan las cifras, aduciendo que éstas son anecdóticas y provienen de fuentes no confiables y parciales. Algunos observadores sostienen que la metodología utilizada por la CNDH puede ser fácilmente manipulada —por ejemplo, en los casos en los que un mismo migrante cuenta una historia a investigadores de diferentes comisiones, que la registran como un nuevo incidente cada vez—. Sin embargo, la cifra de la CNDH es la única estimación disponible, e incluso si no están de acuerdo sobre el número exacto, todos los expertos y funcionarios del gobierno coinciden en que los peligros para los migrantes que cruzan México son cada vez mayores, especialmente en lo que respecta al secuestro extorsivo.

**Rutas migratorias** Sin embargo, muchos migrantes continúan emprendiendo el viaje. La mayoría de ellos buscan la ayuda de los intermediarios tradicionales, popularmente conocidos como “coyotes”, y sus redes de tráfico que operan en toda la región. Los coyotes varían en profesionalismo y precio. Algunos de ellos incursionan en otras actividades, incluyendo el narcotráfico.

La capacidad de los coyotes para operar ha estado sujeta a su habilidad para moverse por el nuevo panorama criminal. Eso implica lidiar con dos actores principales, recientemente involucrados en el tráfico de migrantes, y un tercer actor más tradicional. Los nuevos jugadores son las pandillas callejeras y las organizaciones criminales grandes y diversificadas. Como se describió

anteriormente, estos dos actores tienen diferentes raíces y diferentes objetivos, pero ambos participan en el negocio del tráfico de personas. El actor más tradicional es el sector público, los funcionarios gubernamentales corruptos y los miembros de las fuerzas de seguridad.

## **Organizaciones Criminales**

En la parte superior de la nueva jerarquía del tráfico de migrantes se encuentran las organizaciones del crimen organizado que cobran piso a cualquier actor que mueva mercancía (en este caso cargamento humano) a través de su territorio. El más famoso de ellos en México son Los Zetas. En su núcleo se encuentran exoficiales de seguridad pública que desertaron a finales de los años noventa, para formar parte del equipo de seguridad privada del Cartel del Golfo. Durante los primeros años, su trabajo principal era proteger al jefe del cartel, Osiel Cárdenas Guillén, y su principal producto, la cocaína. Ellos resultaron ser bastante eficaces, especialmente tomando y ocupando el territorio de los carteles enemigos, y con el tiempo se les asignó la tarea de expandir los intereses del Cartel del Golfo en otras partes de México. (El Cartel del Golfo está involucrado en una amplia gama de negocios, que van más allá del tráfico de drogas y de la trata de personas, en particular, la estafa de seguros.)

Cuando crecieron las fuerzas de protección, Los Zetas aprovecharon las nuevas oportunidades de negocio, y comenzaron a cobrar piso a quienes vendían drogas y contrabandeaban en el mercado local, o a los que manejaban bares ilegales o prostíbulos. Ellos utilizaron el dinero de este impuesto para contratar y entrenar a más soldados. Pronto Los Zetas fueron lo suficientemente grandes como para enfrentarse al Cartel del Golfo. Las primeras señales de una ruptura llegaron después de que Cárdenas fuera arrestado en 2003. Para cuando Cárdenas fue extraditado a Estados Unidos en 2007, Los Zetas habían formado su propia organización independiente. Aunque técnicamente todavía respondían a los dirigentes del Cartel del Golfo, Los Zetas eran ahora una amenaza abierta. Los Zetas se separaron definitivamente del Cartel del Golfo a principios de 2010, después de que el cartel asesinara a un comandante de Los Zetas y se negara a entregar a los asesinos.

En todo momento, Los Zetas se han mantenido fieles a su misión central: tomar y controlar el territorio donde ellos cobran piso a otras organizaciones criminales y, cada vez más, a negocios legales. En la mayoría de los casos, Los Zetas no montan una infraestructura para manejar estos negocios ilegales, aunque sí ofrecen servicios de “seguridad”. Su singular enfoque en el aspecto militar de esta ecuación es una fortaleza y a la vez una limitación. Su flujo de ingresos es variado y sus finanzas complicadas, y quizá sea por eso que se sabe que tienen un sistema de

contabilidad estricto que funciona de forma completamente independiente del brazo militar de la organización.

Los Zetas han adoptado la estrategia del Cartel del Golfo de otorgar autonomía a los trabajadores contratados —los lugartenientes, asesinos y halcones—. Algunos de estos trabajadores contratados forman parte de las pandillas, lo que ocasionalmente da lugar a situaciones confusas y complicadas en el terreno. La mayoría son de tiempo parcial (la gente en Monterrey los llama zetillas), y usan sus conexiones con Los Zetas para cometer otros crímenes como el robo de vehículos y los atracos a mano armada. Distinguir los crímenes de Los Zetas de los crímenes motivados localmente es algo difícil, sino imposible.

No es claro cuándo exactamente Los Zetas empezaron a cobrarles dinero a los coyotes, pero en 2008 el grupo se había consolidado en zonas a lo largo de la frontera con Guatemala (especialmente en Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo), desde donde ellos podían lanzar ataques sorpresa sobre los migrantes. Desde entonces, sus zonas de operación se han extendido a lugares como Veracruz, San Luis Potosí y, sobre todo, Tamaulipas. Este último estado se ha convertido en una parte del viaje especialmente difícil para los migrantes, ya que la lucha entre Los Zetas y el Cartel del Golfo se ha intensificado. En agosto de 2010, presuntos integrantes de Los Zetas mataron a por lo menos 193 migrantes en una hacienda abandonada; las razones de ese asesinato aún se desconocen [3]. A principios de 2011, la guerra involucró a cientos de personas más, quienes fueron sacadas de buses públicos y reclutadas a la fuerza como “soldados”, o fueron asesinadas por ser presuntas colaboradoras del Cartel del Golfo, y luego enterradas en fosas comunes.

Los Zetas no es la única gran organización criminal que victimiza a los migrantes. Las facciones de muchas organizaciones participan en actividades similares, bien sea directa o indirectamente. El Cartel del Golfo parece ser el más activo, y trabaja tanto con la policía mexicana como las autoridades de migración mexicana, con el fin de capturar a sus víctimas. Facciones de los carteles de Juárez y Tijuana también cobran piso a los traficantes locales, y pueden, en el caso de Juárez, estar directamente involucrados en el tráfico. Algunas fracciones de la antigua Familia Michoacana, ahora llamada Caballeros Templarios, y del cartel de Sinaloa, supuestamente también han desplazado a los coyotes que operan en sus territorios, y han intentado tomar el control de este negocio.

También hay grandes grupos independientes y semiindependientes que operan en toda la región fronteriza entre México y Estados Unidos. El autor de este artículo tuvo acceso a un archivo en el que se documenta el caso de una red de secuestro de Baja California que engañaba a migrantes mexicanos que pasaban a través del vecino estado de Sonora, haciéndoles creer que cruzarían la frontera cerca a

Tijuana. En lugar de esto, el grupo secuestraba a los migrantes, y sus parientes debían depositar dinero en las cuentas controladas por la red. Los integrantes de esta red además abusaban físicamente de las víctimas, violando a las mujeres y golpeando fuertemente a los hombres.

## **Pandillas**

La participación de las pandillas en el negocio del tráfico de personas no es uniforme a través de la región, pero parece estar dividido en dos grandes categorías: los depredadores y los informantes. Existen numerosos informes sobre miembros de pandillas que acosan, roban y violan a migrantes que se desplazan hacia el norte. Los pandilleros viajan o se hospedan junto a los migrantes, algunas veces en casas de refugio establecidas por organizaciones no gubernamentales (ONG) al lado de rutas conocidas, y reúnen información sobre las potenciales víctimas. Estos informantes luego pasan la información a organizaciones criminales más grandes o a fuerzas de seguridad corruptas, que acorralan a los migrantes en masa para robarles o extorsionarlos a ellos o a sus familias. En general, las pandillas parecen ser trabajadores contratados para tales proyectos.

Diversas pandillas aparecen para controlar diferentes segmentos de las rutas. Sin embargo, a pesar de la masiva presencia de las pandillas callejeras en el Triángulo del Norte, no hay evidencia de que éstas cumplan algún papel hasta que los migrantes cruzan a México. Su presencia en México es especialmente fuerte a lo largo de las vías férreas, la cuales son frecuentemente utilizadas por los migrantes. Sus blancos, como los grupos criminales más grandes, son usualmente los migrantes centroamericanos que intentan el viaje sin los servicios de un coyote.

Las pandillas continúan acosando a los migrantes en Estados Unidos, donde parecen tener más autonomía que en México, y a menudo imitan las actividades de grupos como Los Zetas. Esto se debe a que Los Zetas no controlan el territorio en el cual operan las pandillas en Estados Unidos. En un caso reciente en Houston, las pandillas le exigieron el pago de piso a un contrabandista y retuvieron su cargamento humano hasta que él accedió a sus demandas [4]. Las autoridades de Estados Unidos llaman a esto “coyote rip”: una pandilla que comanda un grupo de inmigrantes y luego los retiene para cobrar su rescate. Según las autoridades de Estados Unidos, varios casos de secuestro en Phoenix están conectados con “rips” similares o con traficantes que les exigen más dinero a sus clientes. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en Phoenix se reportaron cerca de 300 secuestros por año entre 2006 y 2009 [5].

A lo largo de esta cadena, funcionarios estatales corruptos y fuerzas de seguridad públicas parecen estar prestos a aprovecharse de los migrantes que han logrado eludir a las organizaciones criminales. Esto incluye unidades del Instituto Nacional

de Migración (INM), quienes el año pasado supuestamente entregaron al menos 120 migrantes a miembros del Cartel del Golfo para que fueran retenidos para luego exigir un pago por su rescate. Seis funcionarios del INM fueron eventualmente arrestados por el crimen[6]. Al parecer, algunos policías estatales y locales también establecieron operativos de captura de migrantes. En algunos casos, la policía parece estar trabajando con los criminales. En Reynosa, cuatro oficiales de la policía fueron arrestados después de que 68 migrantes fueran rescatados de supuestos miembros del Cartel del Golfo [7]. Los puestos de control del ejército también son puntos de paso difíciles para los coyotes y migrantes, y personal del ejército ha estado conectado con extorsiones y secuestros masivos [8].

Lograr abordar este desafío requiere una combinación de dinero, experiencia, y suerte. Los migrantes tienden a ser categorizados en tres grupos:

Aquellos que pueden darse el lujo de organizar los viajes por vía aérea, bien sea utilizando un coyote o algún otro servicio especializado;

- Aquellos que tienen que combinar viajes por aire, agua y tierra, usando un coyote;
- Y aquellos que viajan por tierra y no pueden pagar un coyote.

## **Coyotes**

Basándose únicamente en evidencia anecdótica, tanto aquellos que pagan un servicio especializado o un coyote para organizar el viaje, como aquellos que no lo hacen, están en riesgo, aunque la percepción es que al contratar un coyote las probabilidades de ser victimizado se reducen significativamente. (Este artículo no examina la primera categoría de migrantes mencionados, y en su lugar se enfoca en las otras dos categorías, ya que los que viajan por vía aérea no enfrentan los mismos riesgos que los que viajan por vía terrestre).

Para aquellos que viajan solos, sin coyotes, los peligros empiezan casi inmediatamente inician el viaje. Sus enemigos a menudo son sus compañeros de viaje. Tanto los miembros de las pandillas como otros migrantes que trabajan como informantes obtienen información acerca de sus compatriotas mientras viajan, y luego pasan esta información a los oficiales corruptos, las pandillas o las organizaciones criminales. Los grupos criminales detienen a los viajeros independientes y los retienen o secuestran en grupos. Luego usan la información obtenida para reclamar un pago por su rescate, o una extorsión.

Estas “detenciones” pueden durar horas, días o incluso semanas. Los grupos criminales más sofisticados han desarrollado una extensa infraestructura para acomodar numerosas víctimas. Existen historias de decenas de víctimas secuestradas que han sido retenidas en grandes bodegas o apartamentos, hasta que

puedan arreglar el pago para sus captores [9]. Los pagos se hacen a cuentas bancarias en Estados Unidos o México, o son transferidos directamente, a través de servicios como Western Union [10]. Las cantidades varían pero pueden llegar a los miles de dólares.

Incluso quienes disponen del dinero para contratar coyotes no tienen garantizado un viaje seguro y libre de incidentes. A quién contraten y cuánto puedan pagar para hacer su recorrido por este paisaje criminal puede establecer la diferencia entre la vida y la muerte. Usualmente, el proceso empieza en el país de origen de los migrantes; un coyote recauda el dinero al comienzo del viaje y envía un representante para que acompañe a los migrantes. La tarifa general oscila entre 2.000 y 10.000 dólares americanos, y puede incluir transporte y alojamiento para grupos pequeños y grandes. En el mejor de los casos, esta tarifa también incluye sobornos a personal de empresas privadas (conductores de autobuses, gerentes de hoteles y otros empleados) y de fuerzas de seguridad (policía, ejército y aduana), así como comisiones para las pandillas y las organizaciones criminales en el camino.

Es especialmente complejo saber cómo los coyotes garantizan un viaje seguro. Según una fuente familiarizada con los arreglos, los coyotes pagan 30.000 dólares americanos semanalmente a Los Zetas, quienes garantizan un paso seguro a un número específico de migrantes que crucen su territorio durante esa semana [11]. Otro coyote le dijo a un investigador que pagaba 500 dólares americanos por cabeza, una vez llegaba a una zona determinada (en este caso, la ciudad de Monterrey, Nuevo León) donde él sabía que grandes grupos criminales tenían el control [12]. A cuál grupo le debía pagar dependía de lo que estuviera ocurriendo en la zona. Sin embargo, los coyotes responsables puede llevar dinero extra en efectivo a la mano para cualquier imprevisto. No importa cuál sea el sistema, siempre hay una gran posibilidad de que se presenten confusiones acerca de quién le pagó a quién y cuándo. Además, en un panorama cambiante, es difícil para los coyotes y sus representantes identificar apropiadamente la función de un determinado grupo criminal y de los informantes.

### **Mezcla de 'cargas'**

Hay evidencia de que numerosas organizaciones criminales en México se lucran de la migración humana, pero la mayoría parecen más interesadas en recolectar piso que en pasar personas por las fronteras. Sin embargo, algunas organizaciones criminales de Centroamérica parecen haber ampliado su portafolio para incluir el tráfico de personas.

El ejemplo más claro de esto es José Natividad Luna Pereira, también conocido como “Chepe” Luna, de nacionalidad salvadoreña, que opera en el Triángulo del Norte. Luna comenzó su carrera transportando productos lácteos de contrabando

de Honduras a El Salvador durante la década de los ochenta. Estas hazañas la valieron a Luna y sus colaboradores el apodo de Cartel de los Quesos. Luna luego incursionó en el tráfico de personas y más tarde se inició en el tráfico de drogas.

En la región, Luna sigue siendo uno de los más importantes traficantes de mercancías legales e ilegales, incluyendo mercancías de contrabando, carros robados y cocaína. Al igual que sus homólogos, mueve sus productos a través de una serie de empresas de transporte que operan en todo el istmo. Su infraestructura legal le ha permitido aprovechar numerosas iniciativas empresariales, utilizándolas para cooptar agentes de la policía judicial y de los sistemas de inmigración. El resultado es una vasta red criminal multinacional y multidimensional que incluye el tráfico de personas.

Otras organizaciones cumplen roles más pequeños en la cadena del tráfico humano. Exmilitares de Guatemala utilizan sus contactos o su control sobre ciertas oficinas gubernamentales para suministrar documentación legítima de los migrantes, en su mayoría de viajeros con medios suficientes y que utilizan el país como punto intermedio. Estas personas pueden obtener la documentación de funcionarios corruptos antes de comenzar su viaje hacia el norte.

No parece que haya muchas pandillas centroamericanas implicadas en el tráfico de personas, pero algunas están presuntamente relacionadas con la trata de personas, y en especial con la prostitución forzada. Los Zetas también se han conectado a la trata de personas en los países del Triángulo del Norte y en México. Según el cónsul de Honduras en Chiapas, Los Zetas han obligado a numerosas mujeres hondureñas a prostituirse en el sur de México [13].

Hay algunos informes de que los migrantes están siendo utilizados para traficar pequeñas cantidades de drogas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, en su evaluación de la frontera entre Texas y México, dijo que los traficantes utilizan lanchas “tiburón” para pasar drogas y migrantes, aunque no está claro si los migrantes y las drogas se transportan en los mismos viajes [14]. Otras evaluaciones de seguridad del Departamento de Justicia también observan esta mezcla de “cargas” [15].

Funcionarios de la agencia estadounidense de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP por sus iniciales en inglés) no le proporcionaron al autor datos específicos sobre la materia, y la mayoría de los informes de inteligencia del Departamento de Justicia no mencionan o no entran en mucho detalle sobre la conexión entre el tráfico de personas y drogas. También puede haber cierta confusión, ya que los grupos de narcotraficantes contratan a migrantes para pasar mochilas llenas de drogas por la frontera, especialmente en las zonas desérticas, como la frontera con el estado de Arizona [16]. Sin embargo, esto parece ser otro tipo de operación. En otras palabras, es distinto traficar grandes cantidades de seres humanos, algunos

de los cuales pueden llevar pequeñas cantidades de drogas, a utilizar a un individuo para pasar de contrabando una mochila llena de drogas.

Los informes mexicanos también parecen corroborar la teoría de que los migrantes son utilizados para el contrabando de narcóticos, aunque, de nuevo, es difícil evaluar la prevalencia de esta práctica. Una de las teorías acerca de la masacre de agosto de 2010 en San Fernando, por ejemplo, señala que los migrantes se habían negado a llevar drogas a Estados Unidos. Aunque hay poca evidencia en este caso, los funcionarios de inteligencia mexicanos le dijeron al autor que las organizaciones del narcotráfico utilizan a los migrantes para llevar pequeñas cantidades de drogas. Dichos funcionarios también señalaron que los migrantes son reclutados por las bandas criminales mexicanas en gran número. Algunos de ellos van voluntariamente, dijeron, mientras que otros son reclutados a la fuerza. Los que se niegan se arriesgan a ser ejecutados.

Los migrantes también parecen estar conectados a la compra de armas al por mayor y al transporte de éstas a través de la frontera entre Estados Unidos y México. Las redes de traficantes de armas suelen tener familias en ambos lados de la frontera, muchas de las cuales tienen doble nacionalidad y cuentan con conexiones con las operaciones criminales en México. Los traficantes utilizan testaferros (por lo general personas que no tienen antecedentes penales) para comprar varias armas, que luego son traficadas a México en grandes cantidades, a través de la frontera, y vendidas a las organizaciones criminales, tanto grandes como pequeñas. Los migrantes pueden ser utilizados como compradores, aunque realmente no llevan ningún producto a ningún lado de la frontera. Sin embargo, la necesidad de encontrar compradores y vendedores de armas “limpios” hace que el uso de los migrantes ilegales sea menos probable.

## **Conclusión**

El viaje de los migrantes desde Centroamérica hacia el país del norte, atravesando México, siempre ha sido peligroso e impredecible, pero en los últimos años han surgido varios obstáculos nuevos. Estos son el resultado de una transformación de las organizaciones criminales de la región. En México, lo que eran grupos pequeños, de gestión familiar, se han transformado en grandes organizaciones delictivas con capacidad militar y un amplio portafolio de actividades criminales, incluyendo el secuestro de migrantes para pedir rescates. Al mismo tiempo, las pandillas han proliferado en la región, sirviendo como los “ojos y oídos” de estas grandes organizaciones criminales, de modo que puedan apoderarse de un gran número de migrantes en sus trayectos.

Estos actores criminales, a menudo en connivencia con las fuerzas de seguridad y funcionarios del gobierno corruptos, se aprovechan de miles de migrantes. Las

estimaciones de cuántos son víctimas no son fiables, pero todas las fuentes consultadas por el autor durante un período de dos años señalan que el riesgo de ser secuestrado ha aumentado de manera exponencial para los migrantes. Muchos de los que no pudieron o no quisieron pagar el rescate han sido asesinados. Una vez más, no hay estadísticas confiables, pero hay fosas comunes, específicamente en el nortero estado mexicano de Tamaulipas, donde operan Los Zetas.

Por su parte, Los Zetas son el más claro ejemplo de una organización criminal mexicana que ha diversificado su portafolio. Este grupo, que comenzó como un brazo armado del Cartel del Golfo, se ha convertido en una organización criminal multifacética que se centra en el control del territorio y cuenta con entrenamiento y tácticas avanzadas. Otras organizaciones criminales que operan en territorio de los Zetas deben pagar un alto costo. El territorio de Los Zetas abarca las rutas más frecuentadas por los migrantes que se dirigen a Estados Unidos.

Grupos como Los Zetas han cambiado las reglas del juego. Los coyotes que transportan a los migrantes deben acordar el pago a Los Zetas (o a los otros grupos criminales) o arriesgarse a perder su carga. Los migrantes sin coyotes corren el mayor riesgo de ser víctimas, aunque contratar un coyote no garantiza un paso seguro. La naturaleza semiautónoma y amorfa de los grupos criminales de hoy en día hace que el viaje del migrante sea más impredecible que nunca. Mientras tanto, el dinero de los rescates mantiene el interés de los grupos criminales y, en algunos casos, las usuras llegan a hasta Estados Unidos. Por ejemplo, las pandillas en Estados Unidos pueden victimizar a los migrantes después de su llegada.

El negocio del tráfico humano se cruza con otras actividades criminales. Algunos traficantes también entran en el negocio de la trata de personas, muchas de las cuales se ven obligadas a ejercer la prostitución; otros traficantes han incursionado en el tráfico de drogas. Los migrantes son reclutados a la fuerza por parte de las bandas criminales, especialmente en México. Algunos de estos migrantes se han convertido en “soldados” para las grandes organizaciones delictivas, mientras que otros se ven obligados a transportar pequeñas cantidades de drogas por vía terrestre.

## **Notas al pie**

[1] Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Informe Especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el Secuestro contra los migrantes (Ciudad de México: CNDH, febrero de 2011), <http://www.insightcrime.org/news-briefs/mexican-national-commission-on-human-rights-special-report-on-immigrant-kidnapping-in-mexico>

[2] *Ibíd.*, 26.

[3] En un principio, sólo se descubrieron 72 cadáveres, pero tras una investigación complementaria el recuento corporal total se encontró que era 193.

- [4] Steven Dudley, 'Coyote' Rips in Houston Give Migrants Another Headache," InSight Crime, mayo de 2011 <http://www.insightcrime.org/news-analysis/ms-13-coyote-rips-in-houston-give-migrants-another-headache>
- [5] Departamento de Justicia de Estados Unidos, Unidad de Inteligencia Nacional sobre Drogas (NDIC), US Southwest Border Smuggling and Violence (Washington, DC: USDOJ, 2010), [www.justice.gov/ndic/pubs38/38661/swb.htm](http://www.justice.gov/ndic/pubs38/38661/swb.htm)
- [6] Geoffrey Ramsey, "Migrants Accuse Mexico Immigration Officials in Kidnap Case," InSight Crime, Crimen InSight, mayo de 2011 <http://www.insightcrime.org/news-analysis/migrants-accuse-mexico-immigration-officials-in-kidnap-case>
- [7] Dudley, "'Coyote' Rips in Houston Give Migrants Another Headache,"
- [8] Amnistía Internacional, Invisible Victims: Migrants on the Move in Mexico (London: Amnesty International, 2010), [www.amnesty.org/en/library/asset/AMR41/014/2010/en/8459foac-03ce-4302-8bd2-3305bdae9cde/amr410142010eng.pdf](http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR41/014/2010/en/8459foac-03ce-4302-8bd2-3305bdae9cde/amr410142010eng.pdf).
- [9] Óscar Martínez: "Somos de los Zetas", El Faro, de noviembre de 2009, <http://m.elfaro.net/es/200911/migracion/386>
- [10] En 2010, Western Union pagó US\$94 millones a las autoridades estatales para ayudar a resolver una investigación de 10 años sobre sus prácticas. Parte del dinero fue usado para las iniciativas contra el lavado de dinero en Arizona, Nuevo México, Texas y California. Véase Jonathan Stempel, "Western Union to Pay \$94 million in Laundering Probe," Reuters, February 2010, [www.reuters.com/article/2010/02/11/westernunion-moneylaundering-idUSN1119905220100211](http://www.reuters.com/article/2010/02/11/westernunion-moneylaundering-idUSN1119905220100211).
- [11] Entrevista del autor con ex funcionarios del consulado salvadoreño, mayo de 2011.
- [12] Southern Pulse, "Inside Illegal Entry — From San Salvador to Houston," InSight Crime, March 2011, <http://www.insightcrime.org/investigations/inside-illegal-re-entry-from-san-salvador-to-houston>
- [13] Geoffrey Ramsey, "Trafficking, Force Prostitution Denounced in Chiapas," InSight Crime, Abril 2011, <http://www.insightcrime.org/news-analysis/with-human-trafficking-up-in-southern-mexico-zetas-emerge-as-major-culprits>
- [14] USDOJ, NDIC, Houston High Intensity Drug Trafficking Area Drug Market Analysis (Washington, DC: USDOJ, 2007), [www.justice.gov/ndic/pubs23/23932/outlying.htm#Figure\\_3](http://www.justice.gov/ndic/pubs23/23932/outlying.htm#Figure_3).
- [15] USDOJ, NDIC, Arizona High Intensity Drug Trafficking Area: Drug Market Analysis (Washington, DC: USDOJ, 2007), [www.justice.gov/ndic/pubs22/22934/22934p.pdf](http://www.justice.gov/ndic/pubs22/22934/22934p.pdf).
- [16] *Ibíd.*